

PONENCIA 2

RESPONSABILIDAD TEOLÓGICA Y PROTAGONISMO JUDICIAL DEL OBISPO DIOCESANO

(CAN. 1673 § 1 Y DC ART.22).

El MIDI, del Papa Francisco, es «una respuesta de justicia y misericordia entre dos sínodos», por lo que, de modo correcto, podemos afirmar que el MIDI es una manifestación clara no solo de la sinodalidad sino sobre todo de la colegialidad episcopal.

En esta misma línea, uno de los criterios fundamentales que guiaron la reforma del proceso de nulidad matrimonial, fue el de la responsabilidad teológica y el protagonismo judicial de los Obispos diocesanos (cann.375-376): el documento, junto con invitarlos a una conversión personal, les recuerda su responsabilidad inmediata en la administración de justicia de su diócesis (Can. 375 §2).

Este documento, en todas sus partes, se hace expresamente cargo de la relación ministerial que existe entre el Obispo y la administración de justicia en la Iglesia particular encomendada a su cuidado, viene nombrado Padre y Juez de la Iglesia particular. A modo ejemplificativo:

a) En el primer párrafo del Proemio el Papa Francisco establece:

“El Señor Jesús, Juez clemente, Pastor de nuestras almas, confió al Apóstol Pedro y a sus Sucesores el poder de las llaves para cumplir en la Iglesia la obra de justicia y la verdad; esta suprema y universal potestad de atar y desatar aquí en la tierra afirma, corrobora y reivindica la de los Pastores de las Iglesias particulares, en fuerza de la cual éstos tienen el sagrado derecho y el deber delante del Señor de juzgar a sus propios súbditos (LG 27)”.

b) El criterio fundamental II:

“El juez único, bajo la responsabilidad del Obispo. La constitución del juez único en primera instancia, siempre clérigo, se deja a la responsabilidad del Obispo, que en el ejercicio pastoral de la propia potestad judicial deberá asegurar que no se permita ningún laxismo”.

c) El criterio fundamental III:

“El Obispo mismo es Juez. En orden a que sea finalmente traducida en práctica la enseñanza del Concilio Vaticano II en un ámbito de gran importancia se ha establecido hacer evidente que el mismo Obispo en su Iglesia, de la que es constituido pastor y cabeza, es por eso mismo juez entre los fieles que le han sido confiados. Se espera por tanto que, tanto en las grandes como en las pequeñas diócesis, el Obispo mismo ofrezca un signo de la conversión de las estructuras eclesásticas, y no deje la función judicial en materia matrimonial completamente delegada a los oficios de la curia”.

d) Lo establecido en el art. 1:

“El Obispo en virtud del can. 383 §1 está obligado a acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados, que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica

religiosa. Por lo tanto, comparte con los párrocos (cf. can. 529 § 1) la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad”.

La reforma plantea, un importante cambio de perspectiva y criterio, al reafirmar el compromiso teológico del Obispo diocesano en la misión de juzgar, al recordar su condición de primer juez de la diócesis y potenciar la dimensión pastoral del proceso canónico de nulidad. ¿Por qué el Papa ha recordado a los Obispos diocesanos su responsabilidad personal de juzgar a sus propios fieles?

Se trata de una cuestión nuclear: poner en el centro de la cuestión matrimonial la dimensión pastoral de la actuación de los tribunales eclesiásticos; el Papa propone «una conversión pastoral de las estructuras eclesiásticas, pues la misión de los tribunales mira, como todas las realidades eclesiales, a contribuir al logro de la *salus animarum* . Lo anterior, presupone y exige una mayor vinculación e incorporación del tribunal en la pastoral familiar diocesana y una cooperación de todas las realidades pastorales presentes en la diócesis (parroquias, etc.) en este servicio apostólico hacia los separados y divorciados (art.1 RP), de modo que no actúen de forma paralela o ignorándose mutuamente, sino conjuntamente, como los dos brazos con que cuenta el Obispo para acoger, ayudar y dar respuesta a los fieles que sufren .

Un regreso al ejercicio personal y directo del Obispo diocesano durante el proceso de la nulidad del matrimonio es la respuesta que surge de los Obispos en el Sínodo extraordinario de la familia. Se afirma en la Relación final del Sínodo Ordinario de Obispos, n.82, “La actuación de este MP constituye una gran responsabilidad para los Obispos diocesanos, que han sido llamados a juzgar ellos mismos algunas causas de nulidad matrimonial, y de todos modos, a asegurar un acceso más fácil de los fieles a la justicia”. El Sínodo le recuerda al Obispo que su función pastoral (c.381 y 391) no se agota en el crear, organizar y sostener el tribunal, sino que, sin perjuicio de la conveniencia de que haya personas especializadas y dedicadas, clérigos y laicos, que puedan cooperar en el ejercicio de esta pastoral judicial, él mismo puede y debe involucrarse más directamente en su actividad, pues el Obispo es el primer juez —el juez nato— de la diócesis.

Naturaleza de la responsabilidad judicial del Obispo diocesano

¿Cuáles son los elementos teológicos-jurídicos considerados por el MIDI al momento de restablecer la función de juez del Obispo diocesano?

Cuando Francisco en este documento, les recuerda a los Obispos que tienen “el sagrado derecho y ante el Señor el deber de juzgar a sus propios súbditos”, se apoya en la base firme de la *Traditio Ecclesiae*, la cual considera al obispo diocesano en cuanto juez, *Sacerdos iuris*, maestro dell’*officium caritatis et unitatis* en la verdad y en la justicia, por lo que la responsabilidad pastoral del obispo en la solución de los conflictos entre sus fieles adquirió cada vez una mayor y más universal significado dentro de la Iglesia (*audientia episcopalis, episcopale iudicium*) .

En el *Codex Iuris Canonici* del 1917, cann. 335 y 1572 §1 , se confirma esta disciplina eclesiástica acerca de la potestad judicial del obispo en su diócesis. Ambos cánones, establecen que en la diócesis para todas las causas el juez de primera instancia es el ordinario del lugar. Es decir, por voluntad divina y en virtud del oficio que se le ha encomendado, le corresponde ser el juez de la diócesis; constituido por el Espíritu Santo a gobernar la Iglesia, en dónde gobernar incluye el juzgar como función necesaria de su ministerio de pastor propio, y si ha sido llamado a gobernar, está llamado a juzgar . El Concilio Vaticano II en LG27 establece que, en el ejercicio de su potestad propia,

tenga siempre ante los ojos, el ejemplo del Buen Pastor. El CIC, de parte suya, afirma que el Obispo diocesano en la Iglesia particular encomendada a su cuidado es el pastor propio, inmediato y solícito de su grey (cann. 369; 383; 386; 391-393). En virtud de tal servicio, de unidad y caridad, custodio de la unidad en la fe y en la disciplina, ha sido constituido para una determinada Iglesia particular, en juez propio (can. 375), como otra forma de manifestación del celo apostólico por las almas de sus fieles. La descripción que hace la legislación tanto del Obispo diocesano como de su ministerio no es en ningún caso ni estática ni autoritaria, sino principalmente relacional y viva, atenta y activa. No solo le reconoce su potestad de gobierno, sino que, además, la fundamenta en su finalidad: “mostrarse solícito con todos los fieles que se le confían” (can. 383) y “enseñar y explicar a los fieles las verdades de fe que han de creerse y vivirse” (can. 386 §1) . Entonces, como pastor propio, le corresponderá guiar hacia la unidad a esa determinada porción del pueblo de Dios. Y, como pastor solícito, acompañará y estará atento a “[...] todos los fieles que se le confían, [...], manifestando su afán apostólico también a aquellos que, por sus circunstancias, no pueden obtener suficientemente los frutos de la cura pastoral ordinaria, así como a quienes se hayan apartado de la práctica de la religión” (can. 383 §3), signo de cercanía evangélica a los fieles, en muchos casos heridos por años de sufrimientos. Por lo mismo, señala el c.391,2: “El obispo diocesano ejerce...la potestad judicial, tanto personalmente como por medio del Vicario judicial y de los jueces”, es decir, no sólo a través del VJ y de los jueces.

Lo reafirma Juan Pablo II en su discurso a la Rota del 29-01-2005: “Por tanto, los obispos están llamados a comprometerse personalmente para garantizar la idoneidad de los miembros de los tribunales, tanto diocesanos como interdiocesanos, de los cuales son moderadores, y para verificar la conformidad de las sentencias con la doctrina recta. Los pastores sagrados no pueden pensar que el proceder de sus tribunales es una cuestión meramente "técnica", de la que pueden desinteresarse, encomendándola enteramente a sus jueces vicarios (cf. ib., cc. 391, 1419, 1423, 1)”

A través de estas referencias normativas que también el MIDI hace suya, se reconoce que la autoridad judicial episcopal es parte de la función pastoral, integral e integrada en las otras funciones, por lo que exige al Obispo diocesano, primero, una conversión afectiva y efectiva en el vista del significado de la administración de justicia en el conjunto de su oficio episcopal y, en segundo término, lo llama a asumir personalmente la función judicial en su diócesis, en cuanto es una potestad divina e innata a su ministerio . Justamente en esta óptica de justicia y en línea con la tradición eclesial, el MIDI va más allá: le pide que en materias matrimoniales se comprometa personalmente. La función de juzgar personalmente, le es tan propia y requiere tanta dedicación o preocupación como la función ejecutiva (c.135), ambas funciones le fueron encomendadas por el mismo Jesús a la Iglesia y a sus pastores. Los obispos, por lo mismo, comparten con el Papa el deber de tutelar la unidad de la fe y de la disciplina matrimonial. Y en cuanto custodios de la fe y pastores de sus fieles, por derecho divino, les corresponde administrar justicia a sus fieles: en el vértice de la administración de justicia en la diócesis está el Obispo diocesano.

La revalorización de la función del Obispo en los procesos de nulidad no se realiza, preferentemente, por la reserva de algunas causas al Obispo –que será siempre necesariamente algo minoritario (c.1683)– sino que pasa por tomar conciencia de la responsabilidad de éste en la provisión adecuada de los oficios implicados en la pastoral judicial, seleccionando a personas técnicamente preparadas, con buena formación jurídica y con cualidades humanas y sensibilidad pastoral, lo cual exigirá

también una cuidadosa formación –jurídica, pastoral y humana– de todos los miembros y cooperadores en esta misión, lo que permita que el planteamiento, tramitación y conclusión de los procesos de nulidad sean realmente expresión de una verdadera actuación pastoral de las estructuras diocesanas, y, más específicamente, del tribunal eclesiástico.

No se trata, eso sí, de recargar al Obispo con el peso y la tarea de juzgar personalmente todas las causas de los fieles de su diócesis, porque también puede seguir ejercitando su potestad judicial por medio del Vicario judicial y de los demás jueces (can.391 §2), sino la de reconocerle la responsabilidad que le corresponde para salvaguardar la institución del matrimonio y para promover, con todas sus fuerzas, la santidad de los fieles (can. 387); poniendo de manifiesto, de este modo, que la función de juzgar le es tan propia como la de santificar y enseñar, y que requiere la misma dedicación y preocupación que aquellas.

Lo que se pretende con MIDI es integrar, no sólo la administración de justicia en la pastoral familiar de la diócesis, sino también la función judicial en el conjunto del ministerio episcopal, considerada ésta última, una de sus graves responsabilidades.

Desde esta doble finalidad que el MIDI le propone al Obispo en el ejercicio de la administración de justicia, cercanía y unidad, a él, en virtud de su potestad propia, inmediata y ordinaria, tiene “[...] el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos [...]” (LG27). Es en este horizonte ministerial, en relación a los fieles que se le han encomendado, le corresponde ejercer su potestad al momento de juzgar él mismo a sus fieles (cann. 381, §1; 369; 375-376): él es el primer responsable de juzgar y resolver los casos que se presenten al Tribunal y en el ejercicio de esta función judicial episcopal deberá no sólo resolver el caso sino también ser instrumento para que los fieles encomendados a su cuidado alcancen los necesarios frutos de salvación. Es decir, no sólo por su potestad jurisdiccional al frente de su Iglesia particular, sino también por su responsabilidad teológica y sino, también, por la finalidad salvífica de su potestad con sus fieles, el Obispo diocesano es juez en su diócesis y moderador de toda la administración de justicia en ella, “tarea de grave responsabilidad” (can. 376) .

De esta forma, la nueva regulación compromete a cada obispo en su respectiva diócesis ser el primero y último responsable de la implementación de la nueva regulación de las casusas matrimoniales en la diócesis a él confiada. El Obispo, “constituido pastor y cabeza, es por eso mismo juez entre los fieles que se le han confiado”. A él, juez para sus fieles, le corresponde cumplir la obra de justicia y de verdad en su diócesis, teniendo como ejemplo, a Jesús, “Juez clemente y Pastor de nuestras almas”, y como fin, el bien de los fieles que se le han confiado manifestándoles su cercanía judicial. Deberá, por lo mismo, promover, indicar, convocar, moderar con todas sus fuerzas y a todas las fuerzas de la Iglesia particular para que de todas ellas se realice el bien de la justicia y de la verdad en la realidad matrimonial que ha fracasado .

Responsabilidad que exige en el Obispo diocesano, ante todo, un profundo sentido de justicia, pero también una adecuada pericia canónica, una experiencia acorde en materia y un particular y permanente cuidado de sus fieles . Entonces, sea personalmente, sea por medio de otros (can. 1491), el MIDI establece una mayor intervención del Obispo diocesano en la justicia eclesiástica y en los procedimientos de nulidad matrimonial, como una de las tareas y responsabilidades importantes que tiene con el Pueblo de Dios.

Reafirmar la dimensión judicial del ministerio divino del Obispo diocesano, ha significado modificar algunas normas canónicas existentes. Teniendo en cuenta esta potestad, propia, principal y ordinaria, a partir de las distintas prerrogativas, derechos y obligaciones de las cuales es titular, emerge del documento una detallada descripción de la figura del Obispo diocesano juez, padre y pastor bueno.

Facultades judiciales del Obispo según MIDI

Como ya hemos señalado, uno de los aspectos más relevantes del *Mitis iudex*, es haber colocado al Obispo en el vértice de la función judicial en materia de nulidad de nulidades matrimoniales, encomendándole tareas que, en términos generales, van desde el control y vigilancia de la administración de justicia, hasta procurar la formación de operadores jurídicos, pasando por el propio desempeño personal de la función como juez. El obispo en su diócesis es constituido pastor y cabeza, es por eso mismo juez de los fieles que se le han confiado. En la práctica, este compromiso episcopal tendrá que traducirse en diversas actuaciones concretas. A título meramente indicativo me permito señalar las siguientes:

- Velar y proteger no solo la indisolubilidad matrimonial sino, además, la efectiva tutela del *ius connubii* (can. 1077).
- Organizar. Art. 1. El Obispo en virtud del can. 383 § 1 está obligado a acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados, que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica religiosa. Por lo tanto, comparte con los párrocos (cf. can. 529 § 1) la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad. Deberá por lo mismo organizar, del mejor modo posible, el servicio de la pastoral familiar con una mínima, pero suficiente estructura y junto a los párrocos acompañar con preocupación a los esposos separados o divorciados, especialmente a aquellos que eventualmente han abandonado la práctica religiosa (art. 1; cann. 383,1 y 529,1). Como padre y pastor debe prestar particular solicitud a estas personas. Hacia ellos, le recuerda la exhortación *Familiaris consortio*, deberá dedicar interés, atención, tiempo, personas, recursos y, sobre todo, apoyo personal a las familias y a cuantos, en las diversas estructuras diocesanas, le ayudan en la pastoral familiar.
- Nombrar. como primer paso que cada Obispo nombre en su respectiva diócesis un Vicario judicial. Esto es independiente de que constituya un propio tribunal (c.391,2).
- Constituir. “El Obispo diocesano tiene el derecho nativo, y libre en razón de esta ley pontificia, de ejercitar personalmente la función de juez y erigir su tribunal diocesano” . El art. 8 §1 de las Reglas Procesales en línea con el can. 1673 §2 lo obliga, en cuanto posible, a constituir para su diócesis un tribunal, cuando tenga los medios judiciales para hacerlo, en el cual está llamado a ejercer funciones de moderador, como expresión del derecho del fiel a la tutela judicial efectiva (can. 221), y al ejercicio del *ius connubii* (can. 1058) en términos de verdad y justicia, en definitiva, por las exigencias de la *salus animarum* (can. 1752). El mínimo necesario para constituir un tribunal diocesano para las causas de nulidad matrimonial consiste contar con un Vicario judicial, un defensor del vínculo y un notario, y, para cuando se requiera su participación porque está en juego el bien público, un promotor de justicia. Deberá contarse con al menos con un asesor, para que actúe en las causas que se resuelvan por el proceso más breve ante el Obispo diocesano. Si se

pretende un tribunal que pueda juzgar colegialmente las causas de nulidad, se deberá contar además con al menos otros dos jueces. Como oficio optativo está el del auditor, al cual el Vicario judicial o el juez puede confiar la instrucción de una causa, tanto si se desarrolla con el proceso ordinario como si se realiza con el proceso más breve ante el Obispo. Según Bunge el Papa presenta 4 principios a partir de los cuales el Obispo podría constituir un tribunal: Cada Obispo tiene el derecho de crear su propio tribunal. Cada Obispo tiene el derecho de asociar uno o más Obispos cercanos (en la misma provincia eclesiástica), para constituir el tribunal, cada Obispo tiene el derecho de asociarse con uno o más Obispos de otras provincias o metrópolis, en este caso pidiendo la licencia a la Signatura Apostólica y el cuarto principio los tribunales regionales, como los que, por ejemplo, existen en Italia, no son obligatorios. El Obispo es libre para decidir si permanecer o hacer de otro modo

- Moderar. Preocupado por el bien de los suyos, debe presidir y conducir personalmente en su Iglesia el proceso judicial matrimonial. En cumplimiento de esta actividad judicial el Obispo, pastor propio, deberá proveer personalmente a todo lo que sea necesario para el fiel cumplimiento de este ministerio, organizando completamente la actividad y, además, seleccionado, formando y acompañando a los operadores de justicia que son también pastores .

- Garantizar. Es el primer garante de este ministerio eclesiástico a través del ejercicio de sus funciones de vigilancia, reglamentación y control estricto de la misma. En términos generales esta responsabilidad judicial de su ministerio episcopal, ministerio técnicamente cualificado, se debería traducir en las siguientes actuaciones: 1. Estableciendo las directrices generales de actuación de todos los operadores jurídicos de su tribunal, especialmente de los miembros del mismo; 2. Buscando personas idóneas para el ejercicio de la función judicial, con formación y dedicación “exclusiva” o “prioritaria”; 3. Estableciendo mecanismos efectivos de control de su actividad, de modo que ésta responda a criterios de celeridad y diligencia; 4. Prestando atención al tenor de los pronunciamientos de su tribunal, de modo que se proteja y garantice el favor veritatis y el favor matrimonii y el principio de indisolubilidad; 5. Procurando que los fieles que lo requieran “tengan asegurada la gratuidad de los procedimientos” (Proemio y art. 7 §2); 6. Estableciendo mecanismos correctores de la negligencia, la impericia o el abuso a la hora de administrar justicia .

- Decretar. Libertad del Obispo a la hora de constituir su tribunal . Como concreción de esta libertad se establece que si no es posible constituir el tribunal colegial, el colegio de jueces que resuelven una causa basta con sólo uno que sea clérigo, y que los otros dos pueden ser laicos (c. 1673 §3), sea en el tribunal diocesano sea en el tribunal eclesiástico cercano que ha sido elegido conforme al can. 1673 §2, puede confiar la causa a un juez único, clérigo, (can.1673 §4), sin necesidad de solicitar la prórroga de competencia a la Signatura Apostólica, ni el permiso de la Conferencia Episcopal y sin que sea necesario aplicar los requisitos exigidos en el can.1425 §4 al juez único. En este caso, en la medida de lo posible, deberá asociarse al juez único dos asesores, cuyas condiciones se precisan enseguida (c. 1673 §4). En caso que, si se pueda constituir un tribunal colegial para la diócesis, éstos mismos pueden estar constituidos por dos jueces laicos (mujeres y/o varones) presididos por un clérigo (can.1673 §3), sin las limitaciones establecidas en el can.1421 §2.

- Juzgar. El can.1673 §1, va a explicitar la función de juez de primera instancia del obispo diocesano en los procesos matrimoniales y va a señalar, además, que, en el caso de procesos de nulidad matrimonial, él es el juez ordinario por ser éstas causas matrimoniales, causas especiales. La DC, por

su lado, en su art. 22 establece, en relación con el Obispo diocesano: “§1. “[...] que puede ejercer la potestad judicial por sí mismo o por medio de otros, de acuerdo con el derecho (cf. c. 1419 §1)”, pero, señala en el “§2. Sin embargo, conviene que no juzgue por sí mismo a no ser que lo exijan causas especiales”. Entonces, de acuerdo a ambas normas, siempre se ejercita la potestad judicial episcopal, sea que la ejercite personalmente sea que lo haga por medio de otros.

- Exclusividad. El Papa pretende con esta reforma, agilizar lo más posible no sólo la tramitación de las “nulidades manifiestas”, con el proceso más breve ante el Obispo, sino también la del proceso ordinario. El proceso más breve, creado ex novo, y como modalidad extraordinaria del procedimiento judicial, viene regulado de modo sumamente sintético en el art. 5, que da una nueva redacción a los cann. 1683-1687 (ulteriores precisiones y aclaraciones en los arts. 14-20 de las RP). El proceso más breve no es un proceso administrativo; el mismo Papa ha excluido este tipo de procedimiento administrativo, para el estudio de la nulidad de un matrimonio; siempre un proceso de naturaleza judicial que de modo privativo corresponde juzgar al obispo diocesano.

¿Por qué en el proceso más breve el juez es el Obispo? El Proemio afirma que como “el Buen pastor”, está obligado a ir al encuentro de los fieles que tienen necesidad de especial cuidado y que esto lo realiza particularmente cuando se hace cargo en primera persona de la resolución de los procesos más breves, establecidos para resolver los casos de nulidad más evidente. Francisco precisa que “No se me escapa, sin embargo, cuánto un juicio abreviado pueda poner en riesgo el principio de la indisolubilidad del matrimonio; precisamente por esto he querido que en tal proceso sea constituido juez el mismo Obispo, que en virtud de su oficio pastoral es con Pedro el mayor garante de la unidad católica en la fe y la disciplina”. Es este el motivo, teológico y disciplinar, que fundamenta esta exclusividad episcopal en este tipo de proceso: como padre, comprometido a vivir como el Buen Pastor, le corresponde promover eficazmente el bien de la Iglesia, defender la unidad de la fe y la disciplina común y ser, para ella, en cuanto responsables inmediato de la misma, el principio y fundamento visible de comunión .

Desde la publicación de éste documento, la administración de justicia matrimonial en la Iglesia, no podrá ser más un servicio completamente delegado en el Vicario Judicial o en los Tribunales eclesiásticos, sino que requerirá el empeño personal del Obispo diocesano y de los equiparados a él , tanto en lo que tiene que ver con la adopción de medidas necesarias para organizar la pastoral judicial diocesana como en el ejercicio personal de tener que juzgar causas las de nulidad matrimonial. En esta reforma los Obispos diocesanos, han sido llamados a asegurar un acceso más fácil de los fieles a la justicia eclesiástica (cann. 213 y 221 §1) y a juzgar ellos mismos algunas causas de nulidad matrimonial, manifestando de este modo su inmediata solicitud pastoral con los fieles que han fracasado en su matrimonio. Así pues, la aplicación de este documento procesal, es una gran responsabilidad para los Ordinarios diocesanos, llamados a juzgar ellos mismos algunas causas y a garantizar, en todos los modos, un acceso más fácil de los fieles a la justicia.